

El desencuentro entre protestas y elecciones en Colombia (2010-2015)

The disagreement between protests and elections in Colombia (2010-2015)

Edwin Cruz Rodríguez*

Universidad Nacional de Colombia

Fecha de aceptación: 15 de noviembre

Fecha de recepción: 26 de noviembre

ISSN: 2219-4142

Cruz, Edwin. «El desencuentro entre protestas y elecciones en Colombia (2010-2015) ». *Politai: Revista de Ciencia Política*, Año 7, segundo semestre, Revista N°13: pp. 53-67

* Candidato a doctor en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia. ecruzr@unal.edu.co

Resumen

Entre 2010 y 2015 tiene lugar el ciclo de protestas más importante en la historia reciente de Colombia, agenciado por organizaciones sociales de izquierda. Al mismo tiempo, el Polo Democrático Alternativo, el principal partido de izquierda, experimenta un declive electoral y la fragmentación entre sus tendencias internas. Por consiguiente, la izquierda colombiana no consigue traducir el descontento de la protesta social en resultados electorales. Este artículo analiza el desencuentro entre protestas y elecciones, planteando que es resultado, por una parte, de constricciones estructurales propias de un sistema político en donde la política electoral no está desligada de la violencia y, por otra, de la incapacidad de la izquierda para generar marcos de acción colectiva capaces de interpelar votantes más allá de las identidades excluyentes de sus distintas tendencias.

Palabras clave: Colombia, Izquierda, Polo Democrático, Movimientos sociales, Protesta social.

Abstract

Between 2010 and 2015, the most important protest cycle in the history of Colombia takes place, organized by leftist social organizations. At the same time, the Polo Democrático Alternativo, the main leftist party, experiences an electoral decline and the fragmentation of its internal tendencies. Consequently, the Colombian left fails to translate the discontent of social protest into electoral results. This article analyzes the disagreement between protests and elections, arguing that it is a result, on the one hand, of structural constraints characteristic of a political system in which electoral politics is not separated from violence and, on the other hand, the inability of the left to generate frameworks of collective action capable of challenging voters beyond the identities that exclude their different tendencies.

Key Words: Colombia, left, Polo Democrático, social movements, social protest.

Introducción

La combinación de repertorios de acción colectiva, especialmente protestas y elecciones, fue fundamental para que partidos y organizaciones de izquierda tuvieran éxito en el marco del llamado «giro progresista» en Latinoamérica. Por ejemplo, en Bolivia, el MAS-IPSP capitalizó en diciembre de 2005 el descontento expresado en un ciclo de protestas que empezó en 2000; el triunfo de Alianza País en Ecuador también convergió con las protestas que defenestraron a Lucio Gutiérrez en abril de 2005 (Cruz 2013). Estas situaciones contrastan con el caso de Colombia, donde las más grandes protestas de su historia reciente, entre 2010 y 2015, coincidieron con un declive electoral de la izquierda y una crisis organizativa de su principal partido, el Polo Democrático Alternativo.

En efecto, en ese período se produjo un auge inusitado de la protesta social, que puede apreciarse tanto en términos cuantitativos como cualitativos. De acuerdo con la base de datos de luchas sociales del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP 2014), en 2013, se presentaron 1027 protestas, la cifra más alta desde que empezaron sus registros en 1975. Desde una perspectiva cualitativa, existe un ciclo ascendente de protestas de grandes magnitudes, que comprende el paro universitario de octubre de 2011; el paro nacional cafetero en febrero y marzo de 2013 (Cruz 2012; 2013); el paro campesino del Catatumbo, en junio y julio de ese año; otro paro campesino en mayo de 2014; y una «Minga» en mayo y junio de 2016, todos liderados por organizaciones sociales y políticas de izquierda.

En contraste, tanto en las elecciones locales de 2014 como en las parlamentarias y presidenciales de 2015, se evidenció un marcado retroceso para la izquierda, cuyo corolario fue la pérdida de la alcaldía de Bogotá, su bastión durante casi una década. Así pues, el descontento social de las protestas no se tradujo en la renovación de la clase política ni en el ascenso electoral de los partidos de izquierda. ¿Por qué en Colombia hay un desencuentro entre protestas y elecciones?

Este fenómeno es resultado de las constricciones estructurales en las que se desenvuelve la competencia electoral, pero también de los problemas de acción colectiva de las organizaciones sociales y los partidos de izquierda. En el país, las elecciones están ligadas a fenómenos de gamonalismo armado y electorados cautivos mediante maquinarias clientelistas, por lo que el «voto de opinión» únicamente opera en las grandes ciudades. Allí los elevados costos de las campañas, por faltas de control de una autoridad electoral altamente politizada, son restrictivos para actores con pocos recursos. Por otro lado, los antagonismos entre organizaciones sociales y partidos de izquierda, fundamentados en identidades excluyentes, imposibilitan la construcción de estructuras organizativas y marcos de acción colectiva capaces de interpelar a los votantes.

Para desarrollar estos argumentos, en primer lugar, se reconstruye la experiencia de unidad de la izquierda en el partido Polo Democrático Alternativo, así como su rendimiento electoral hasta 2010. A continuación, se examina su declive y fragmentación. En la tercera parte se analiza la influencia de la izquierda sobre las protestas. Finalmente, se plantean algunas explicaciones para el desencuentro entre protestas y elecciones.

El auge del Polo Democrático

Durante aproximadamente una década el Polo Democrático fue exitoso en generar un proceso de unidad entre distintos sectores, movimientos y organizaciones sociales de la izquierda colombiana, aún cuando se trata de una unidad frágil y en disputa permanente entre sus distintas fracciones. Las experiencias de participación electoral de la izquierda, en la Unión Patriótica (UP) y la Alianza Democrática M-19 (AD-M19) a principios de los noventa, se frustraron como

consecuencia de la espiral de violencia que se desencadenó en su contra y del legado clientelista del bipartidismo, que funcionó como un férreo obstáculo a la participación de terceras fuerzas incluso tras la apertura política que produjo la Constitución de 1991. Sin embargo, aproximaron a la izquierda a la acción política legal.

La UP fue una coalición de izquierda que se creó en 1984 como producto de las negociaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y funcionó como «brazo político» con el fin de facilitar la futura reinserción de la guerrilla a la vida civil y política. Obtuvo participación en el Congreso y ocupó puestos de elección popular a nivel local, pero prácticamente fue exterminada en una «guerra sucia» agenciada por narcotraficantes, élites políticas locales y sectores de las FF.AA. (Dudley 2008; Carroll 2011). Así, a la crisis general de la izquierda, luego de la caída de la URSS, se adicionó en Colombia el problema de la participación política institucional en un contexto fuertemente marcado por el recurso a la violencia.

La otra experiencia emblemática de la izquierda en los noventa fue la AD M-19, partido que reunió a los dirigentes guerrilleros desmovilizados del Movimiento 19 de Abril, luego de un acuerdo de paz con la administración de Virgilio Barco (1986-1990). Si bien tuvo importantes victorias electorales –su candidato presidencial en 1990, Antonio Navarro Wolf, obtuvo el 12,48% de los votos, participó en el Constituyente y tuvo representación en el Congreso– no logró consolidarse como una alternativa debido a su fragmentación interna y a los obstáculos de la maquinaria clientelista del bipartidismo tradicional (Pizarro 1997; Peñaranda y Guerrero 1999).

En fin, pese a la apertura política que produjo la nueva Constitución, solo entre fines de los noventa y comienzos del siglo XXI se empieza a producir un proceso de unidad en el interior de la izquierda que termina con la formación del Polo Democrático Alternativo (PDA) (Rodríguez 2005). A fines de 1999, en el marco del auge de las movilizaciones en contra del ajuste económico del gobierno Pastrana (1998-2002) y de la arremetida del paramilitarismo contra los líderes sociales, se forma el Frente Social y Político (FSP), en el que convergen sindicatos y organizaciones sociales con el objetivo de construir unidad y un nuevo liderazgo en la izquierda. De acuerdo con Suhner (2002: 100-101), en el lanzamiento del FSP, confluyeron cerca de tres mil personas de organizaciones como la UP, el Partido Comunista Colombiano (PCC), la Corriente de Renovación Socialista, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Red de Iniciativas por la Paz, entre otros.

Para las elecciones presidenciales de 2002 y bajo el liderazgo del antiguo presidente de la CUT, Luis Eduardo Garzón, se constituyó el Polo Democrático. De él formarían parte el FSP, Unidad Democrática, Vía Alterna, el Partido Socialdemócrata Colombiano, la Alianza Nacional Popular (Anapo), la Alianza Social Indígena (ASI) y el Partido Socialista Democrático. Garzón tuvo 680.245 votos (6,16%), el partido también consiguió 7 curules en el Senado y 7 en la Cámara de Representantes. En agosto de 2003, se conformó el Polo Democrático Independiente, alrededor de la campaña de Garzón a la alcaldía de Bogotá. De esta coalición no formaron parte el FSP, Unidad Democrática, el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR), ni ASI, aunque apoyaron la candidatura. Garzón se hizo con la alcaldía, catalogada como el segundo puesto de elección popular más importante después de la Presidencia de la República.

En diciembre de 2005, nuevamente ante la necesidad de enfrentar las elecciones presidenciales del año siguiente en las que competirían contra el presidente-candidato Álvaro Uribe Vélez, el PDI y Alternativa Democrática (AD), organización que aglutinó militantes del FSP que decidieron mantener su identidad, se coaligan para formar el Polo Democrático Alternativo (PDA). En una consulta popular, el exmagistrado Carlos Gaviria fue electo como candidato presidencial. En 2006, Gaviria tuvo la más elevada votación que la izquierda colombiana ha conseguido en la historia: 2.613.157 votos (22,01%), ubicándose en el segundo

lugar de la contienda presidencial. Sin embargo, no alcanzó a pasar a la segunda vuelta, mientras el PDA alcanzó 10 senadores y 8 representantes a la Cámara.

En 2007, el PDA retuvo la Alcaldía de Bogotá con Samuel Moreno Rojas, proveniente de la ANAPO, de tal manera que, entre 2003 y 2011, el partido tuvo allí su bastión. También consiguió 21 alcaldías en otras ciudades y municipios de cinco departamentos, y la gobernación del departamento de Nariño (Sandoval 2011: 88).

En síntesis, bajo el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), el PDA consiguió un importante ascenso electoral, obteniendo significativos cargos de elección popular y un posicionamiento discursivo que le permitió presentarse a los ciudadanos-electores colombianos como una alternativa política legítima en el gobierno y la oposición. Este posicionamiento político de la izquierda se explica por varios factores. Para Rodríguez (2005), se trata del surgimiento de lo que denomina la «nueva izquierda», cuyo origen es posible por el declive de los partidos tradicionales, el resurgimiento de los movimientos sociales, el recrudecimiento del conflicto armado y la crisis económica desde 1999.

Un incentivo inmediato para la coalición de las distintas organizaciones en el marco del PDI fue la reforma electoral de 2003, en la medida en que trataba de reducir la fragmentación partidaria aumentando los umbrales para el reconocimiento de personería jurídica a los partidos (García 2012: 48). Gutiérrez (2006), analizando el impacto de las reformas institucionales, sostiene que «sin el voto preferente el PDA hubiera sido inviable». Así, la unidad del PDA, en medio de la heterogeneidad característica de la izquierda colombiana, ha sido posible en parte como consecuencia de los mecanismos institucionales y, prácticamente, se ha limitado a la competencia electoral.

Por su parte, Basset (2008) sostiene que uno de los elementos que le ha permitido al PDA proyectarse en el escenario electoral y alcanzar cierta unidad, es la implementación de elecciones internas abiertas. Este mecanismo no solo habría atraído a los votantes que la izquierda tradicional no podía conseguir, sino que funcionaría como un elemento de unificación de las fracciones del partido en vista de que sus resultados han sido respetados por todos.

Por otra parte, la consolidación del PDA como el principal referente de oposición al gobierno de Álvaro Uribe Vélez no habría sido posible sin la polarización ideológica que este suscitó. Villarraga (2006) afirma que la polarización en términos izquierda/derecha es lo que explica la existencia del PDA. Este partido se erigió en la principal piedra en el zapato para las iniciativas de política económica y la militarización durante la administración Uribe.

De acuerdo con la caracterización que Gutiérrez (2006) hace del sistema de partidos luego de la reforma política de 2003, la existencia de un gobierno como el de Álvaro Uribe, que ha abandonado la representación policlasista típica de los partidos tradicionales sin ocultar su favoritismo por el sector privado,¹ es un ambiente propicio para el desarrollo de un proyecto alternativo como el del PDA. En efecto, el ideario del PDA en buena medida se articula en torno a la solución negociada del conflicto, lo que lo ubica en las antípodas de la solución militar defendida por Uribe (Suhner 2002: 104).

La crisis del Polo

La fragilidad de la coalición electoral de izquierda salió a flote en 2010. Por una parte, varias figuras salieron de la coalición para liderar otros partidos. Por otro lado, se desató una gran crisis debido a la gestión corrupta de Samuel Moreno Rojas y la Anapo en la Alcaldía de Bogotá, que llevaría a su posterior destitución por parte de la Procuraduría: la principal consecuencia fue

¹ Esta condición debe ser examinada junto a su guerrerismo, que empieza por desconocer la existencia de un conflicto armado en el país.

deslegitimar el dominio del Polo en la administración de la capital. Ambos aspectos pusieron de presente las fragilidades de un partido que nunca consiguió constituir su unidad más allá de los fines electorales, puesto que las distintas organizaciones políticas que de él hacen parte mantuvieron su identidad y sus proyectos particulares.

Hacia 2010, Luis Eduardo Garzón lideró, junto a otros dos exalcaldes de Bogotá, la formación del Partido Verde en un proceso que se retrotrae a 2008. En el Polo, la consulta interna para la elección de candidato presidencial fue ganada por Gustavo Petro, antiguo militante del M-19, frente a Carlos Gaviria. En las elecciones de ese año, el partido obtuvo 8 curules en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes, lo cual significó una reducción relativa de su caudal electoral. Como candidato presidencial, Gustavo Petro obtuvo 1.331.267 votos (9,1%), en virtud de los cuales reclamó la dirección del partido. Por eso, tras la negativa del Comité Ejecutivo, que ratificó en la presidencia a Clara López, el grupo afín a Petro decidió dejar el partido el 1 de diciembre de ese año.

Quienes se retiraron con Petro fundaron el Movimiento Progresistas, que por un tiempo se convirtió en aglutinante de otros sectores descontentos en el interior del Polo con miras a su participación en las elecciones locales de 2011. Ese año, Petro consiguió la Alcaldía de Bogotá, alcanzando 721.308 votos (32,16%) y su partido obtuvo 8 concejales en la ciudad. Por su parte, el candidato del Polo, Aurelio Suárez Montoya del MOIR, tuvo solo 32.300 votos. La victoria de Petro significó para la izquierda retener la alcaldía de la capital aún después de la crisis de legitimidad que había acarreado la corrupción bajo el gobierno de Samuel Moreno.

No obstante, la crisis en el interior del Polo continuaría ahondándose en los años siguientes. El 9 de agosto de 2012, el PCC es expulsado de la coalición. El Comité Ejecutivo del Polo arguyó que los comunistas incurrieran en doble militancia en tanto que simultáneamente pertenecían al Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, una plataforma de movimientos sociales fundada en abril de ese año. Como sostiene Múnera (2012: 30), si se aplicara con rigor este criterio de «doble militancia», habría que expulsar a todos los dirigentes del Polo, pues como se ha dicho es una coalición de organizaciones que nunca renunciaron a su identidad organizativa originaria.

En realidad, para algunos sectores mayoritarios dentro del Polo, como el MOIR, los liberales de izquierda articulados en torno al exmagistrado Carlos Gaviria y el sector liderado por Clara López, resultaba inadmisibles que el PCC hiciera parte de la Marcha Patriótica. Las razones que alegaban era la supuesta ambigüedad de este movimiento con respecto a la lucha armada. Con ello hacían eco de los discursos oficiales que veían en Marcha Patriótica, una estrategia de la guerrilla de las FARC, para aglutinar sus bases sociales homóloga a la UP y que podría desencadenar otro genocidio político. A decir verdad, nunca se comprobó que Marcha Patriótica, que es más un movimiento social sin aspiraciones electorales y cuya razón de ser es fomentar la participación de las comunidades campesinas en la construcción de la paz, hiciera parte de tal estrategia; sin embargo, el asunto reactivó una vieja discusión que décadas atrás había producido un gran antagonismo entre el MOIR, de orientación maoísta, y el PCC, entonces pro-soviético.

La fragmentación del Polo evidenció su carácter de coalición electoral más que de partido político en sentido estricto. García (2012: 11) argumenta que estos acontecimientos revelaron el paso de un «faccionalismo cooperativo», que le habría permitido al partido erigirse como oposición al gobierno de Uribe, hacia un «faccionalismo degenerativo», en el que los frágiles vínculos que crean las elecciones emergen una vez que cambia el contexto. En efecto, como afirma Sandoval (2011: 86), dentro el PDA persistieron los grupos políticos que perdieron su personería jurídica luego de la reforma de 2003 (ANAPO, MOIR, PCC, etc.), pese a que para las elecciones de 2006 se acogió un ideario de unidad que implicaba disolver las agrupaciones preexistentes.

Como se ha mencionado, en lugar de construir una unidad organizativa, el Polo Democrático fue una coalición de organizaciones con identidades y memorias acumuladas de consecuencias centrífugas, en donde las agrupaciones preexistentes privilegiaron sistemáticamente sus intereses particulares sobre los intereses comunes del partido (Múnera 2012: 33).

El hecho de que sea un partido de coaliciones entre otras agrupaciones políticas dificultó en extremo su funcionamiento interno, puso en desventaja a los afiliados que no son miembros de esas agrupaciones, complicó llegar a acuerdos e incluso fue un incentivo para tolerar el clientelismo propio de algunas de sus fracciones. Todas estas razones impidieron la construcción de una identidad de partido, por ello se redundó en una precaria institucionalización y en el poco desarrollo del programa (Sandoval 2011: 90).

Las elecciones de 2014 y 2015 confirmaron el declive ya no solo del PDA sino de la izquierda en su conjunto. En septiembre de 2013, para enfrentar las elecciones del año siguiente, el Movimiento Progresistas hizo una alianza con el Partido Verde, adoptando el nombre de Alianza Verde. Esta asociación consiguió once congresistas, entre ellos tres alineados a la izquierda: el senador Antonio Navarro Wolf y los representantes a la Cámara Inti Asprilla y Ángela María Robledo. El Polo, por su parte, solo alcanzó 8 curules en el Congreso, 5 en el Senado y 3 en la Cámara de Representantes. La candidatura del Polo a la presidencia, con la fórmula de Clara López y Aída Avella, esta última proveniente de la UP, alcanzó 1.958.414 votos, ocupando la cuarta posición, un gran retroceso en relación con las elecciones de 2006.

Sin embargo, en la segunda vuelta electoral, que dirimiría entre el candidato-presidente Juan Manuel Santos del Partido de la U, y Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático, se suscitó otra discusión en el interior del Polo: mientras una tendencia liderada por el MOIR, representada por el Senador Jorge Enrique Robledo, se decantó por dejar en libertad a los votantes del Polo para guardar coherencia con la oposición que el partido había hecho al primer gobierno de Santos; otras corrientes se articularon en torno a Clara López, quien terminó por apoyar al candidato-presidente como la única manera de dar continuidad al proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, que se veía amenazado por un posible gobierno del derechista Centro Democrático. Esta misma discusión se actualizó cuando, ya en ejercicio del gobierno, el presidente Santos designó a Clara López como ministra de Trabajo en abril de 2016.

Por otra parte, la alcaldía de Petro enfrentó una férrea oposición que llevó a su destitución en una controvertida decisión de la Procuraduría. Este hecho ocurrió entre el 9 de diciembre de 2013 y el 22 de abril de 2014, debido a la implementación de un cambio en el esquema privado de recolección de desechos para ponerlo en manos del Estado. En buena medida, por esa razón, aunque el Movimiento Progresistas encaró la campaña por la Alcaldía de Bogotá en 2015 con una candidata propia, María Mercedes Maldonado, al final renunció para apoyar a la candidata del PDA, Clara López, quien obtuvo 498.710 votos (18,26%) situándose en el tercer lugar. Así, la unión coyuntural de la izquierda con fines electorales no fue suficiente para contrastar la campaña de Enrique Peñalosa de Equipo por Bogotá y Cambio Radical, centrada en el eslogan de «recuperar Bogotá», que capitalizó el descontento y la publicidad negativa que habían tenido los gobiernos de izquierda durante diez años.

El desencuentro

El problema de acción colectiva de la izquierda se ha manifestado no solo en su declive electoral y en la pérdida de la Alcaldía de Bogotá, sino sobre todo en su incapacidad para «capitalizar» electoralmente el inédito ciclo de protestas que se extendió desde la movilización estudiantil, en el segundo semestre de 2011, hasta el segundo paro agrario, a mediados de 2014.

Lo paradójico es que la coyuntura revelaba bastantes oportunidades políticas. Existía un descontento palpable en buena parte de la población que se expresó en movilizaciones, muchas de las cuales obtuvieron un gran respaldo y consiguieron insertarse, aunque fuera por un tiempo, en la agenda pública nacional (Cruz 2014). La apertura de negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, desde agosto de 2012, provocó toda una reconfiguración del escenario político, cuya más visible consecuencia fue la división de las élites, entre un sector emergente representado por el expresidente Uribe y la tradicional élite política centralista representada por Santos. Desde 1982, cuando se ensayaron las primeras negociaciones con la insurgencia, los procesos de paz provocan realineamientos políticos en función de las posiciones frente al conflicto armado y de las probables transformaciones del sistema político con el eventual éxito de los diálogos. Pero también implican un cambio en las coordenadas del lenguaje político, que permite la emergencia de las demandas acalladas o invisibilizadas y amplía el rango de asuntos que pueden considerarse como parte de la agenda pública.

Las movilizaciones, en términos generales, tuvieron como motivación el rechazo de la política neoliberal del gobierno Santos, en particular en el caso de la reforma universitaria y en la política agraria; pero también se fundaban en la demanda de participación en las negociaciones de paz de La Habana. Sin embargo, la izquierda no tuvo la capacidad para aprovechar ese nuevo escenario y los esfuerzos de articulación en el ámbito social no se tradujeron en el escenario político-electoral. Lo paradójico del fenómeno radica en que las estructuras de las principales movilizaciones entre 2010 y 2014 son organizaciones sociales afiliadas a los partidos de izquierda; de hecho, todas en algún momento han formado parte del PDA.

El paro nacional universitario, que se desarrolló entre el 12 de octubre y el 16 de noviembre de 2012 en contra de la propuesta de reforma del sistema de educación superior (propuesta por el Gobierno Nacional por considerar que lesionaba la calidad y el carácter público y autónomo de la universidad), fue liderado por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE). Esta plataforma reunió a las principales organizaciones estudiantiles, la mayoría de las cuales tienen vínculos con organizaciones políticas de izquierda. Por ejemplo, la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE) pertenece al MOIR; la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU) pertenece al PCC; en la Federación de Estudiantes Colombianos (FEU) hacían presencia estudiantes del PCC y de lo que posteriormente se denominaría Marcha Patriótica; por su parte, en el Proceso Nacional Identidad Estudiantil lidera la tendencia «Camilista», inspirada en las doctrinas del sacerdote Camilo Torres Restrepo.

De la misma manera, el paro nacional cafetero, realizado entre el 25 de febrero y el 8 de marzo de 2013, estuvo liderado por una organización del MOIR: el Movimiento por la Defensa y la Dignidad de los Cafeteros Colombianos, cuya razón de ser gira en torno a las siguientes posturas: la defensa de los pequeños productores de café afectados por la crisis del sector, el rechazo a los tratados de libre comercio con Estados Unidos, a la minería en zonas cafeteras y a la importación de cafés procesados, entre otras.

El paro campesino en la región del Catatumbo tuvo lugar entre junio y julio de 2013 y se prolongó durante 53 días, comprometiendo a más de diez mil personas y manteniendo bloqueada esa parte del país. Los principales motivos de rechazo eran la erradicación forzada de cultivos ilícitos sin programas de economía alternativa; la militarización de los problemas sociales de la región; y la constitución de una zona de reserva campesina. La movilización fue liderada por la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), que recibe apoyo de la Marcha Patriótica y del PCC.

El paro nacional agrario, la protesta agraria más importante desde la década de los setenta, se desarrolló inmediatamente entre el 19 de agosto y el 12 de septiembre de 2013, afectando la mayor parte del territorio nacional con bloqueos, mítines, marchas y cacerolazos protagonizados

por más de doscientas mil personas. La movilización, en contra del incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos alcanzados en anteriores protestas, estuvo liderada por Dignidad Agropecuaria, organización de pequeños productores con influencia del MOIR, y dos plataformas organizativas del campesinado en zonas de colonización: la Mesa de Interlocución y Acuerdo, liderada por la Marcha Patriótica; y el Coordinador Nacional Agrario, en donde el Congreso de los Pueblos y Poder y Unidad Popular, otra tendencia dentro del Polo, tienen un gran liderazgo.

Una de las consecuencias más importantes del paro fue la realización de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular el 12 de septiembre de ese año. El objetivo era contrarrestar el denominado «pacto agrario» que el gobierno desarrolló en la misma fecha con los grandes empresarios del agro. La Cumbre se constituyó en una plataforma organizativa inédita en la historia reciente de Colombia, pues consiguió articular en torno a un pliego único de peticiones a las principales organizaciones campesinas en su encuentro del 15 y 17 de marzo de 2014.

Demandando que el Gobierno Nacional cumpliera con los compromisos adquiridos con el campesinado, la Cumbre desarrolló otro paro nacional agrario, entre el 28 de abril y el 9 de mayo, que significó su reconocimiento como un actor representativo, en el marco de la Mesa Única de Participación y Concertación por parte del Gobierno. Sin embargo, tras 19 meses de negociaciones, los incumplimientos del Gobierno motivaron otra gran protesta. Entre el 30 de marzo y el 12 de junio de 2016 se desarrolló la Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en la que participaron cerca de cien mil personas.

En suma, mientras las organizaciones de la izquierda volcadas hacia la política electoral y coaligada en el PDA sufrían una fragmentación, las organizaciones sociales que de ellas dependen fueron capaces de agenciar el más importante ciclo de acción colectiva de las últimas décadas. En otras palabras, la unidad de la izquierda en lo social no se tradujo en el campo político-electoral.

Las hipótesis

La imposibilidad de capitalizar electoralmente el descontento social que irrumpió con el ciclo de protesta se explica en buena medida por las constricciones estructurales del sistema político colombiano, sobre todo con posterioridad al cambio de reglas de juego implementado bajo el gobierno Uribe. Por otra parte, la falta de unidad, responsable de la imposibilidad de traducir los triunfos de las movilizaciones en el escenario político-electoral, es apenas un síntoma de un problema de fragmentación que apenas investiga cómo se ha producido la socialización política de la izquierda en Colombia, particularmente en la construcción de identidades y marcos de acción colectiva que no son únicamente diferentes sino también antagónicos entre sí.

Los factores estructurales

Existen constricciones en el sistema político que impiden a la izquierda operar como quisiera en el escenario electoral. Bastaría decir que el principio «un ciudadano=un voto» difícilmente aplica en ciertos lugares del país. Algunas de las explicaciones son el secular gamonalismo armado transmutado de formas diversas en medio de la guerra, los electorados cautivos de las maquinarias clientelistas, o una combinación de ambos (Gutiérrez 2014; García 2009).

El «voto de opinión» si acaso opera en las grandes ciudades, debido a la fluidez entre legalidad e ilegalidad que caracteriza la competencia partidaria y de la que el fenómeno de la «parapolítica» –el ascenso de políticos regionales con apoyo explícito de organizaciones criminales y paramilitares– es una muestra fehaciente (López 2010; Valencia 2007). La judicialización de

estas conductas nunca avanzó lo suficiente, según Gutiérrez (2014: 115), la parapolítica «había involucrado a más de 400 políticos investigados al día de hoy [2014], 102 diputados de los cuales 25 fueron ya condenados, veinte gobernadores, más de doscientos alcaldes y seis mil civiles». Para completar, y aunado a lo anterior, la ausencia de controles efectivos por parte de una autoridad electoral politizada, el Consejo Nacional Electoral, aumenta astronómicamente los costos de las campañas, volviéndolas restrictivas y excluyendo de la competencia a buena parte de los actores políticos representativos, izquierda incluida (Roll 2010; Vargas 2009).

Por otra parte, las movilizaciones sociales y la participación electoral funcionan con lógicas distintas que no necesariamente se articulan. En el seno de la izquierda, existe una fluidez entre lo social y lo político (Archila 2004). Pero generalmente las organizaciones políticas o partidos, la mayoría de las veces imbuidos por el ideal vanguardista, han tratado de subordinar a las organizaciones sociales. Al estar la izquierda dividida, el resultado de estos intentos ha sido la generación de antagonismos entre las organizaciones. Por eso, no pocas veces la participación electoral ha terminado por desarticular los esfuerzos organizativos en el ámbito social.

Así, por ejemplo, grandes movilizaciones como las el paro nacional universitario de 2011 habrían sido imposibles sin el acumulado de experiencias, conocimientos, recursos y liderazgos de las organizaciones partidistas de la izquierda. Sin embargo, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, una plataforma que aglutinó luego de cuatro décadas a las distintas organizaciones del estudiantado y que se proyectaba como una gran organización gremial, sufrió una fragmentación precisamente en época de elecciones: las organizaciones estudiantiles que la componen empezaron a competir entre ellas siguiendo las orientaciones de los partidos a los que pertenecen. En vez de unir, las elecciones suelen dividir a las organizaciones sociales de la izquierda colombiana, con lo cual sus distintas fracciones terminan disputándose el mismo electorado en lugar de disputar el de los políticos tradicionales.

Por otra parte, podría argüirse que luego de una década de «seguridad democrática», durante la cual se revivió la Doctrina de Seguridad Nacional para criminalizar y reprimir toda expresión de izquierda, convertida en encarnación del «terrorismo», la cultura política colombiana se ha «derechizado»; por lo tanto, las fuerzas progresistas difícilmente podrían tener un buen desempeño electoral (López 2014). No obstante, esta hipótesis dejaría sin explicar por qué fue, precisamente como única oposición al uribismo, que la izquierda consiguió sus mejores votaciones históricas desde 2002. Además, tal aserto supone que, en el país, las elecciones se definen por posicionamientos ideológicos, lo que a todas luces está muy lejos de la realidad, como anteriormente se argumentó.

Ninguna de estas razones explica por sí misma la incapacidad de la izquierda para capitalizar las movilizaciones en votos, que habría sido posible si se tiene en cuenta que se trató de un contexto político totalmente inédito. Por ello, es necesario examinar los problemas endógenos de las organizaciones de izquierda.

Los problemas endógenos

La incapacidad de capitalizar las movilizaciones en el escenario político electoral es en buena parte responsabilidad de los sujetos de izquierda. El escenario político se transformó abriendo oportunidades políticas, pero en lugar de «reencaucharse» para aprovechar ese nuevo escenario y producir convergencias organizativas y discursivas, la izquierda se sumió en sus tradicionales y particulares disputas.

Ahora bien, el problema de fondo es que esas disputas tienen un gran arraigo en la forma en la que históricamente se han formado las identidades de los sujetos colectivos de la izquierda colombiana e impiden generar un marco de acción colectiva compartido que guíe su

acción colectiva, al ser identidades excluyentes y sectarias. La construcción de esas identidades se retrotrae a mediados del siglo XX, con el surgimiento de lo que en el momento se denominó la «nueva izquierda», que tuvo en América Latina un gran influjo proveniente de la revolución cubana (1959) con su doctrina del foquismo y, a partir de 1960, de la ruptura chino-soviética.

De acuerdo con Múnera (1998: 159-192), el deterioro de la adscripción ideológica partidista que implicó el Frente Nacional –acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador para repartir entre ellos los cargos públicos, empezando por la presidencia entre 1958 y 1974– favoreció el surgimiento de organizaciones políticas y sociales fuera del control bipartidista, la mayoría de izquierda. A ello se sumó una diversificación ideológica y organizativa de la izquierda a causa de las influencias internacionales como la revolución cubana y la evolución internacional del socialismo. De tal manera, el monopolio que el Partido Comunista había tenido sobre la izquierda se resquebrajó por la aparición de una multiplicidad de organizaciones foquistas, socialistas-trotskyistas y maoístas, ante las cuales las estrategias reformistas del Partido aparecían como la antítesis de un proyecto revolucionario como el cubano. A la diversificación de la izquierda, se adicionaban las disidencias de los partidos tradicionales: el Movimiento Revolucionario Liberal, entre 1960 y 1968; la Alianza Nacional Popular, a partir de 1964; y el Frente Unido del Pueblo, en 1965.

En fin, la nueva izquierda sería presa de agudas discusiones que con frecuencia llevaron a divisiones internas. Tales discusiones se originaban fundamentalmente en diferencias sobre cuestiones teóricas y prácticas de la revolución. Así, aunque la nueva izquierda tenía en común el afán romper con los partidos tradicionales y con el Partido Comunista, se distanciaban tanto en la lectura de la realidad política como en la definición de la táctica y la estrategia apropiada para agenciar el proceso revolucionario (Múnera 1998). En la historia de la izquierda colombiana, estas disputas internas asumieron la forma de conflictos de suma cero, una confrontación entre amigos y enemigos en que ninguno de los actores puede ganar sin que el otro pierda.

En otros términos, nunca fue cierto que no existieran enemigos en la izquierda, pues en las relaciones entre agrupaciones primó el realismo político: cada organización se percibe como la verdadera representante de la izquierda o como más izquierdista que las demás, lo que equivale a auto-asignarse una cierta superioridad moral e intelectual.

¿Por qué se construyen identidades excluyentes y sectarias en el interior de la izquierda? Varias investigaciones (Beltrán 2002; López 1994) apuntan a explicar el dogmatismo de los militantes de la izquierda como producto de una compleja adaptación de los dogmas católicos predominantes en aquella época, estructurados en función de una lucha sin cuartel entre el bien y el mal, a las formas y el lenguaje de la militancia izquierdista. En efecto, las prácticas políticas y cotidianas de la izquierda estuvieron por mucho tiempo embebidas de cierto *ethos* religioso, en donde la filiación a una organización constituía más un acto de fe que el producto de una reflexión racional.

Empero, teniendo en cuenta que no se trata de un problema particular del caso colombiano, sino que el sectarismo en la izquierda tiende a ser universal, podría explicarse por la hipótesis que planteó para el caso el estadounidense Richard Sennett (2003: 253). Desde su perspectiva, el sectarismo y el dogmatismo en la formación de las identidades de izquierda se explica por el hecho de que sus militantes provenían esencialmente de la clase media y debían demostrar que no eran «pequeñoburgueses», sino que tenían conciencia de clase, lo que los llevaba a adoptar rígidas ideas y formas de comportamiento muchas veces intentando asimilarse al de los obreros.

En Colombia, esta hipótesis cobra relevancia si se tiene en cuenta que la «nueva izquierda» afincó sobre todo entre los estudiantes universitarios provenientes de una clase media cuya irrupción se debe a los procesos de modernización social –industrialización, urbanización, etc.- de mediados de siglo, que encontraron un sistema político –el del Frente Nacional– totalmente impermeable a sus demandas de democratización, redistribución y participación política (Leal 1984).

En cualquier caso, las identidades excluyentes de los distintos grupos y tendencias de la izquierda han dificultado la construcción de un marco de acción colectiva común, incluso a pesar de que existe un ideario de unidad en el PDA (Sandoval 2011). Un marco de acción colectiva es un «esquema interpretativo» mediante el cual los sujetos construyen una representación de su realidad (Snow y Benford 1992: 137). Se trata de concepciones del mundo que se construyen estratégicamente con el objetivo de legitimar la causa y articular personas y grupos a la acción colectiva (McAdam, McCarthy y Zald 1999: 27).

En este sentido, comprende cuando menos (1) el diagnóstico de la realidad: por qué las cosas no son como deberían ser y quiénes son los responsables, el antagonismo; (2) la identidad o la autodefinición de un nosotros a partir de articulaciones, que están de acuerdo con (3) una solución a los problemas, un deber ser en función del cual se produce la acción colectiva.

Un análisis pormenorizado de los marcos de acción colectiva en la izquierda colombiana sobrepasa este espacio. Sin embargo, es posible afirmar que en el país, la izquierda, tomada como una totalidad, carece de un marco de acción colectiva unificado, pues sus componentes están fragmentados o no son compartidos por los sujetos colectivos que la conforman. Estas características dificultan su unión en torno a procesos más amplios y de más largo aliento que las elecciones, e impide interpelar a otros sectores de la sociedad.

La falta de un marco de acción colectiva común, por ejemplo, dificultó una lectura unificada de la división entre Uribe y Santos, que hasta hoy es objeto de acalorados debates, y en buena medida imposibilitó aprovechar las oportunidades abiertas. Las disputas anteriormente reseñadas entre la tendencia de Clara López (comprometida en el apoyo a la política de paz del gobierno Santos hasta el punto de aceptar ser parte de su gabinete como ministra de Trabajo), y el MOIR (liderado por el senador Jorge Enrique Robledo, quien prefiere una oposición frontal a Santos bajo el supuesto de que sus políticas sociales y económicas no son sustancialmente distintas a las del anterior gobierno de Uribe), evidencian una profunda ruptura en cuanto a la interpretación de los problemas y los responsables de los mismos.

Asimismo, el ideario maoísta del MOIR ha llevado a sus líderes a comprometerse en una defensa de la industria nacional, como la de los pequeños productores agrarios, pero también de grandes empresarios como los principales ingenios productores de azúcar. Por su parte, otras tendencias como las del PCC, la Marcha Patriótica o Poder y Unidad Popular, se han volcado a la defensa de los intereses de los campesinos sin tierra o colonizadores, planteando alternativas que garanticen su derecho a la propiedad, frente al avance de la minería y los agronegocios, como las zonas de reserva campesina o los territorios agroalimentarios.

En fin, podría decirse que la mayoría de las organizaciones coaligadas en el PDA manejan dos marcos de acción colectiva para dar sentido a su práctica política. Desde la crisis a principios de los años noventa, ha habido una liberalización de la izquierda, hasta el punto de que en varios momentos su proyecto parece haberse reducido a defender lo que queda de la Constitución de 1991. También la necesidad de captar votantes diferenciándose de la lucha armada, en un contexto en donde la izquierda civil se asocia a la guerrilla (cuyo proyecto es socialdemócrata pero se persigue mediante las armas), ha contribuido a esa liberalización.

Así, hacia fuera, la praxis política de la izquierda adquiere sentido en un marco que trata de persuadir a los demás actores de que concibe la política como la generación de consensos en medio de adversarios; es decir, respetando las irreductibles diferencias. De ahí que las plataformas ideológicas de los distintos actores poco hablan de hacer la revolución o caminar hacia el socialismo. Mucho menos se emplean los términos con los que en la prensa se anatemia el discurso de izquierda como «mamerto», o conceptos como «clases sociales», «explotación», «burguesía» o «proletariado». Por el contrario, el discurso izquierdista está hegemonizado por los significantes dominantes de democracia, ciudadanía, respeto por las diferencias, etc.

Sin embargo, como anteriormente se afirmó, hacia adentro, en las relaciones entre actores de la izquierda, subsiste un marco schmittiano, que concibe la política como una lucha entre enemigos, una relación de suma cero en la cual lo que ganan ellos lo perdemos necesariamente nosotros y viceversa. Lo que predomina aquí es el realismo político, de tal manera que cada organización se percibe como la verdadera representante de la izquierda o como más izquierdista que las demás. Los compañeros se reducen a aquellos que participan de la misma organización, mientras que el resto de organizaciones se perciben potencialmente como enemigos.

Corolario

Entre 2002 y 2010, el Polo Democrático consiguió articular a buena parte de la izquierda colombiana en una coalición electoral que se posicionó como la principal oposición al gobierno de Álvaro Uribe. Esto obedeció, en buena medida, a la polarización política que suscitó su determinación de acabar el conflicto armado intensificando la guerra, mientras que el partido de izquierda reivindicaba la solución negociada.

Paradójicamente, cuando el contexto político experimenta una transformación, provista por la apertura de negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, el PDA empieza a sumirse en una crisis que se expresa en el declive de su rendimiento electoral. El mayor golpe es la pérdida de la alcaldía de Bogotá, y su fragmentación entre las distintas organizaciones que nunca consiguieron construir una identidad política común. La otra gran paradoja radica en que en el mismo periodo, entre 2010 y 2015, se desarrolló el ciclo de protestas más importante en la historia reciente del país, todas las cuales contaron con el liderazgo de las organizaciones sociales de la izquierda.

Así pues, mientras la izquierda social consiguió articularse para agenciar grandes movilizaciones, la izquierda política tendió a fragmentarse, de tal manera que fue imposible capitalizar el ciclo de protestas en el terreno político-electoral. Este hiato se explica por factores estructurales característicos de la competencia política en Colombia, pero sobre todo por el hecho de que la izquierda no ha podido apartarse de la lógica excluyente y sectaria inserta en la construcción de sus identidades políticas.

El gran ciclo de protestas de los últimos años puso en evidencia, entre otras cosas, una renovación generacional de los liderazgos sociales y políticos. Se trata de una generación que ha tenido muchas dificultades para superar las prácticas y discursos que dan forma a las identidades excluyentes de sus organizaciones porque, en la izquierda colombiana, como diría Marx al comienzo de *El Dieciocho Brumario*, «el espíritu de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de las vivas».

Referencias

- Archila, Mauricio. 2004. «Lo social y lo político en Colombia (1958-200)». *La historia política hoy. Sus métodos y las ciencias sociales*. Ed. César Ayala. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 207-233.
- Basset, Yann. 2008 «La izquierda colombiana en tiempos de Uribe». *Nueva Sociedad* No- 214, 4-13
- Beltrán, William. 2002. «Del dogmatismo católico al dogmatismo de izquierda. El ambiente político en la Universidad Nacional en los años 60 y 70». *Revista Colombiana de Sociología* vol. VII, No-2, 155-178.
- Carroll, Leha Anne. 2011. *Violent Democratization. Social Movements, Elites, and Politics in Colombia's Rural War Zones, 1984–2008*. Indiana: University of Notre Dame Press.
- Centro de Investigación y Educación Popular. 2014. *Luchas sociales en Colombia 2013*. Bogotá: CINEP.
- Cruz, Edwin. 2012. «La Mane y el paro nacional universitario de 2011 en Colombia». *Ciencia Política* No-14, 140 – 193.
- Cruz, Edwin. 2013. «Todos somos hijos del café: Sociología política del paro nacional cafetero». *Entramado* vol. 9, No-2, 138 – 158.
- . 2014. «Dignidad en movimiento. El ascenso de la movilización social en Colombia». *Confluente. Revista di Studi Iberoamericani Università di Bologna* vol. 6, No- 25, 241 – 275.
- Dudley, Steven. 2008. *Armas y urnas. Historia de un genocidio político*. Bogotá: Planeta.
- García, Sergio. 2012. *Enemigos íntimos: el cambio en la dinámica faccional del Polo Democrático Alternativo*. Quito: Flacso.
- García, Mauricio. 2009. «Caracterización del régimen político colombiano». *Mayorías sin democracia. Desequilibrio de poderes y Estado de derecho en Colombia, 2002-2009*. Eds. Mauricio García y Javier Rebelo. Bogotá: Dejusticia, 16-82.
- Gutiérrez, Francisco. 2006. «Estrenando sistema de partidos». *Análisis Político* No-57.
- . Francisco. 2014. *El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)*. Bogotá: Debate-Universidad Nacional de Colombia.
- Leal, Francisco. 1984. «La participación política de la juventud universitaria como expresión de clase». *Juventud y Política en Colombia*. Ed. Miguel Cárdenas. Bogotá: FESCOL-Instituto. SER:155-
203. López, Claudia. ed. 2010. *Y refundaron la patria...* Bogotá: Debate.
- López de la Roche, Fabio. 1994. *Izquierdas y cultura política: ¿oposición alternativa?* Bogotá: CINEP.
- . 2014. *Las ficciones del poder. Patriotismo, medios de comunicación y reorientación afectiva de los colombianos bajo Uribe Vélez (2002-2010)*. Bogotá: Debate-Universidad Nacional de Colombia.
- McAdam, McCarthy y M. Zald. 1999. *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*. Madrid: Itsmo.
- Múnica, Leopoldo. 1998. *Rupturas y continuidades. Poder y movimiento popular en Colombia 1968-1988*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-CEREC.
- . 2012. «El Deshielo (La fragmentación del Polo Democrático Alternativo)». *Izquierda* No-26. 30-35.
- Peñaranda y Javier Guerrero. comps. 1999. *De las armas a la política*. Bogotá: Tercer Mundo-IEPRI.
- Pizarro, Eduardo. 1997. «¿Hacia un sistema multipartidista? Las terceras fuerzas en Colombia hoy». *Análisis Político* No-31.

- Rodríguez, César. 2005. «La nueva izquierda colombiana. Orígenes, características y perspectivas». *La nueva izquierda en América Latina. Sus orígenes y trayectoria futura*. Ed. César Rodríguez. Bogotá: Norma.
- Roll, David. 2010. *¿Democracias prepago?* Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Sandoval, Luis. 2011. «Polo: 5 años de experiencia partidaria. El alto costo de la debilidad». *Análisis Político* No 72, 83-100.
- Sennett, Richard. 2003. *El Respeto*. Barcelona: Anagrama.
- Snow y R. Benford. 1992. «Master frames and cycles of protest». *Frontiers in social movement theory*. Eds. Aldon Morris y Carol McClury. New Haven y London: Yale University Press, 133-155.
- Suhner, Stephen. 2002. *Resistiendo al olvido*. Bogotá: Taurus UNRISD.
- Valencia, León. 2007. *Parapolítica. La ruta de la expansión militar y los acuerdos políticos*. Bogotá: Intermedio.
- Vargas, Catalina. 2009. «La politización del Consejo Nacional Electoral y la reelección presidencial». *Mayorías sin democracia. Desequilibrio de poderes y Estado de derecho en Colombia, 2002-2009*. Eds. Mauricio García y Javier Rebelo. Bogotá: Dejusticia, 382-312.
- Villarraga, Álvaro. 2006. «El Polo Democrático Alternativo: el reto de forjar un proyecto de oposición democrática y civilista». *Revista Foro* No-58.